

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-100-30-2022-00140-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada mediante apoderado judicial por LUZ MILA BAQUERO WILCHES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

La señora LUZ MILA BAQUERO WILCHES inicia acción de tutela contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, por considerar que se le está vulnerando el derecho fundamental de petición y al debido proceso

HECHOS Y PRETENSIONES

Expone la accionante que el 13 de septiembre de 2021, mediante el radicado No.2021_10582176, se radicó ante al accionada, solicitud de cumplimiento de sentencia judicial debidamente ejecutoriada, a efectos de que se procediera a dar cumplimiento a la Sentencia emitida el 21 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, y la sentencia de segunda instancia del 06 de agosto de 2020 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda, dentro del proceso con radicado 2016-00369, aportando con la solicitud la primera copia con constancia de ejecutoria y demás documentos que se exigen para el cumplimiento de la sentencia que ordenó a la accionada reliquidar la mesada pensional de la accionante, habiendo transcurrido a la fecha más de cinco meses sin que se haya proferido respuesta que solucione la petición de fondo.

Refiere que el 24 de septiembre de 2021, le enviaron comunicación con el radicado No.2021_10584512, informando que la solicitud fue entregada a la gerencia encargada de su estudio y resolución bajo el radicado No.2021_6863388. De otro lado, indica que en días pasados acudió al CAP- COLPENSIONES de Fusagasugá a solicitar información del trámite y le entregaron copia del oficio BZ2021_6863388-2686199 radicado No. 2021_6863388 mediante el cual solicitaban allegar certificación de las horas extras devengadas entre el 31/01/2012 al 31/01/2013.

Manifiesta la accionante que dicho requerimiento solo busca dilatar los trámites de cumplimiento de la sentencia, debido a que, para radicar la petición administrativa ante COLPENSIONES, exigen como requisito adjuntar los Formatos 1, 2 y 3B de la época y las debidas certificaciones que contienen la información laboral de la accionante, precisando que

se aportó dicha certificación junto en los anexos de la demanda ante el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot y debatido en juicio, lo que no esta sujeto a nuevas discusiones, debiendo proceder la accionada a atender la orden judicial y reliquidar la pensión de la accionante, pues el no hacerlo ha venido en detrimento de su ingreso mensual y su mínimo vital.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia del Derecho de Petición elevado ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES el 11 de septiembre de 2021, bajo el radicado 2021_10582176.
- Copia de la comunicación No.2021_10584512 del 24 de septiembre de 2021, expedido por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.
- Copia de la comunicación No.BZ2021_6863388-2686199 del 25 de octubre de 2021, expedido por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.
- Certificación No.1248 del 22 de enero de 2013 expedida por el Hospital San Rafael de Fusagasugá.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 03 de marzo de 2022, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 04 de marzo de 2022, se notificó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, dio contestación a la acción constitucional.

CONTESTACIÓN de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

La entidad accionada refirió: “En atención al auto de 3 de marzo de 2022, por medio del cual el Despacho admitió la acción de tutela interpuesta por la señora LUZ MILA BAQUERO WILCHES, quien solicita la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con ocasión al cumplimiento de las condenas impuestas el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot de 21 de marzo de 2017 y modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de agosto de 2020, dentro del proceso con radicado 25307334000220160036900, que ordenó el reconocimiento de una pensión de vejez, me permito informar:

Verificados los sistemas de información de esta Administradora, la accionante presentó solicitud encaminada al cumplimiento de las sentencias indicadas, el 13 de septiembre de 2021 en radicado 2021_10584512, la cual, una vez verificados los documentos aportados,

se pronunció la Dirección de Estandarización de la entidad, mediante Oficio No. BZ2021_6863388-2686199 de 25 de octubre de 2021, debidamente notificado con la guía No. MT691762877CO de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72, y por el que se le solicitó completitud documental en los siguientes términos:

En respuesta a su petición mediante la cual solicita se dé cumplimiento de un fallo judicial, nos permitimos informarle que una vez validada la documentación por usted aportada, es necesario allegar adicionalmente a esta administradora, el siguiente documento: Certificación de las horas extras devengadas entre el 31/01/2012 al 31/01/2013.

Recuerde que para radicar la documentación faltante debe acercarse a un Punto de atención de Colpensiones en su ciudad y citar el número de radicación de esta comunicación.

(...)

A la fecha no han sido radicados en esta entidad los documentos solicitados, indispensables para la liquidación de la prestación que ordena el proceso objeto de la tutela.

Ahora bien, el trámite encaminado al cumplimiento de las sentencias judiciales no es un proceso inmediato, se trata de una compleja articulación de actuaciones en las que interactúan las diferentes áreas de Colpensiones, desde la dirección de estandarización la cual se encarga del enlistamiento de las sentencias, la dirección de procesos judiciales, incluso, frente a condenas en abstracto, como la del caso concreto, pueden ser necesarias las actuaciones de las direcciones de las Direcciones de Historia Laboral y de Ingresos por Aportes, y una vez sean ejecutadas todas la citadas, se procederá remitir a la Dirección de Prestaciones Económicas, la cual se encarga de la emisión del acto administrativo definitivo, el cual será notificado al actor por los medios aportado para tal fin.

Por lo anterior, y hasta tanto el accionante no radique la información solicitada en el oficio que se adjunta, no podrán ejecutarse las pertinentes a la emisión del acto que de cumplimiento al fallo en los que en derecho corresponda. Enunciado lo anterior, no puede predicarse el desconocimiento de los derechos alegados por el accionante, por lo que la acción de tutela deberá ser declarada improcedente.

Finalmente, se informa que la acción de tutela no es el medio idóneo para discutir el cumplimiento de este tipo de disposiciones judiciales, toda vez que se desnaturaliza una acción caracterizada por su carácter subsidiario y residual, la cual no procede ante la existencia de otros mecanismos de defensa, como para el caso concreto, la acción ejecutiva, de la cual no obra prueba alguna de haber sido adelantada por la accionante en pro de su derecho, razón por la cual, el resolver lo deprecado, desborda el ámbito de las competencias propias del Juez de Tutela, razón por la cual, se solicitará se declare improcedente el amparo solicitado.”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, el ciudadano HENRY LADINO DIAZ quien actúa en calidad de Representante legal de MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S., identificada con NIT 900.682.543-8, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES es la entidad administrativa a quien se le aduce la vulneración del derecho invocado y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94)

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

La jurisprudencia constitucional también ha establecido sobre el Debido Proceso que: *“El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.*

El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la

observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite.

En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del particular quede en manos del ente administrativo. Por lo cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el que se aparta de las normas aplicables, para realizar su propia voluntad, implica violación del debido proceso."

Ahora bien, se observa que la Corte ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela respecto al Debido Proceso, cuando se advierte o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos judiciales de defensa.

Problema Jurídico

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental de petición invocado por el accionante.

CASO CONCRETO

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6°, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Del caso concreto, advierte el Despacho, que la accionante LUZ MILA BAQUERO WILCHEZ, a través de su apoderado judicial, presentó solicitud de cumplimiento de sentencia judicial debidamente ejecutoriada ante la accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES- COLPENSIONES el 13 de septiembre de 2021, bajo el radicado No. 2021_10582176, solicitud que fue tramitada internamente por la accionada y entregada a la gerencia encargada para resolver de conformidad, tal como se constata en la comunicación No.2021_10584512 remitida por la accionada.

De otro lado, se tiene conforme a las documentales allegadas por la accionante y la contestación allegada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, que está última elevó, mediante la comunicación No.BZ2021_6863388-2686199 del 25 de octubre de 2021, requerimiento a la accionante a efectos de que se sirviera allegar certificación de las horas extras devengadas entre el 31 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013, a efectos de resolver la solicitud de cumplimiento de fallo judicial. La citada comunicación fue remitida a la accionante a través del servicio de mensajería 4-72, a la dirección de notificaciones aportada en su escrito de petición, al igual que se encuentra comprobado, conforme a los hechos expuestos en el escrito de tutela y sus anexos, que la accionante tienen conocimiento del requerimiento efectuado por la aquí accionada.

Así mismo, se advierte que la accionante no acredita haber aportado las documentales solicitadas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, mediante la comunicación No.BZ2021_6863388-2686199 del 25 de octubre de 2021, tanto en la petición inicialmente radicada o con posterioridad al requerimiento efectuado por la accionada, por lo que encuentra el Despacho que no hay lugar a acceder al amparo solicitado, pues corresponde a la accionante prestar su colaboración y aportar las documentales solicitadas, a efectos de que la accionada proceda a dar respuesta a su solicitud de cumplimiento de sentencia judicial, pues no basta con que la certificación aludida hubiera obrado como medio probatorio dentro del proceso judicial dentro del cual se expidió la sentencia de la cual se exige su cumplimiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en cabeza de la accionante recae la responsabilidad de actuar con la debida diligencia y prestar su colaboración frente a los requerimientos efectuados por las Entidades antes las cuales eleva peticiones, para que estas sean resueltas oportunamente, por cuanto la Acción de Tutela es un instrumento de protección excepcional, cuando se advierte que no existen otros mecanismos de defensa, la falta de idoneidad de los mismos, o bien la inminencia de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, encuentra el Despacho, que la acción de tutela instaurada es improcedente para acceder al amparo constitucional que solicita la accionante, pues es de resaltarse que a la fecha la accionante no acredita haber aportado las documentales solicitadas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, mediante la comunicación No.BZ2021_6863388-2686199 del 25 de octubre de 2021, así las cosas, deberá la accionante proceder de conformidad y agotar el trámite administrativo correspondiente, como quiera que, cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa, el mecanismo Constitucional es improcedente, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, puesto que la acción de tutela no puede reemplazar las acciones ordinarias.

Sumado a lo anterior, es de tener en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable de manera injustificada, estableciendo unos requisitos para que se presente el perjuicio irremediable en los siguientes términos:

“A) El perjuicio ha de ser inminente: 'que amenaza o está por suceder prontamente'. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.

C) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.” (Sentencia T-253 del 27 de mayo de 1994)

Conforme a lo anterior, encuentra el Despacho, a la luz de lo indicado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, que la acción de tutela instaurada es improcedente para acceder al amparo constitucional que solicita la accionante, toda vez que no se encuentra demostrado que a partir de las actuaciones u omisiones de la accionada se cause un perjuicio

irremediable, como quiera que la accionante no acredita ser una persona de especial protección o que padezca una enfermedad catastrófica, ni se acredita siquiera sumariamente de qué manera se está afectando el mínimo vital de la accionante.

Así las cosas, es claro no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, al igual que no hay ningún derecho fundamental que se le esté vulnerando a la accionante por parte de la entidad accionada, pues como se advirtió en precedencia, corresponde a la accionante aportar las documentales que le fueron requeridas por la accionada a efectos de que sea resuelta la solicitud de la cual se pretende su amparo.

En este orden de ideas, el Despacho considera que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho a la igualdad y del debido proceso, por lo que, con fundamento en lo expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora **LUZ MILA BAQUERO WILCHES** por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e20ed9a5f51325ea5792baed1852f0e37268b57d199114440a8c163e43dde32a**

Documento generado en 11/03/2022 09:04:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>